

# Regreso a clases no ha sido seguro y ya hay escuelas cerradas por contagios

Diferentes organizaciones científicas y de la sociedad civil fijaron posición este 05 de noviembre sobre el regreso a clases presenciales en el país y también acerca de la vacunación contra el COVID-19 en niños y adolescentes venezolanos.

El documento, presentado en rueda de prensa, fue suscrito por la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, la Alianza Venezolana Por La Salud, Sociedad Venezolana de Salud Pública, Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Excubitus (Derechos Humanos en Educación), la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación Médicos Unidos Venezuela, Red de Madres, Padres y Representantes, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

En el texto, se denuncia la ausencia de una gestión «planificada y efectiva que garantice un plan oficial nacional de vacunación contra la COVID-19 ordenado», acorde con criterios de priorización y basado en análisis de riesgo y vulnerabilidad de las personas.

Además, las organizaciones exponen que la apertura de los centros educativos no ha contado con un plan de apoyo por parte de las autoridades educativas y de salud y alertan que no ha sido bajo condiciones seguras.

«El reinicio de clases presenciales en el subsistema de educación básica en todos sus niveles (inicial, primaria y media) no se ha hecho en condiciones que garanticen la seguridad y la protección de niñas, niños y adolescentes y de su grupo familiar (...) El Ejecutivo Nacional no consultó a las instituciones académicas, sociedades científicas, gremios, padres y representantes ni a la sociedad en general sobre las medidas y condiciones en que debería producirse un regreso a clases seguro, sin poner en riesgo a la población involucrada. Lo que hubiese contribuido a que estas decisiones pudiesen haber sido el resultado de un proceso participativo que condujese a construir consensos sobre el carácter y contenido de las mismas», señalan en el documento,.

Aparte de ratificar que las escuelas no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad de los menores, destacan que, antes del inicio de clases presenciales, se debió garantizar de manera expresa «la inmunización del estudiante, familia y personal docente, para el caso de la población comprendida entre los 13 y 17 años».

Las sociedades médicas y científicas y organizaciones sociales advirtieron también sobre los riesgos que implica una flexibilización prolongada en el escenario de una «dinámica epidémica de intensidad creciente».

Por otra parte, Nancy Hernández de Martín, presidenta fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), consideró que es incierta la cifra que ofreció el Ministerio de Educación del gobierno de Nicolás Maduro sobre el porcentaje de asistencia en las dos primeras semanas de clases.

«Ellos hablan de 80%, pero la instrucción fue que se diesen clases de manera progresiva, no hay un aforo completo, por tanto, no podemos contar con cifras. El diagnóstico que llevan sobre la asistencia a los planteles oficiales es muy baja. La primera semana de clases no alcanzó a 20%. En primer lugar por este aforo reducido que ordenó el Ministerio de Educación, pero por otra, porque hay mucho temor por parte de las familias debido a la opacidad en cuanto a qué protocolos de seguridad deben seguirse. El Estado no ha garantizado protocolos a los planteles oficiales. Planteamos que el plan de vacunación fuese para proteger a la familia y tampoco se hizo», reclamó durante la presentación del documento.

La profesora universitaria también dijo que tienen información de que escuelas de Carabobo, Anzoátegui y Miranda han tenido que cerrar sus puertas a pocos días de abrirlas por contagios de docentes con COVID-19 que, además, no han sido diagnosticados a tiempo «por falta de pruebas PCR», por lo que el diagnóstico se ha hecho por síntomas.

Agregó que no es lo mismo el tiempo de permanencia de un menor en un centro comercial o transporte público a su presencia en un aula de clases.

«Estamos hablando de un promedio de tres a cuatro horas entre docentes y niños y algunos hacen jornadas completa con aforo reducido. En el caso de las escuelas, y más en los planteles oficiales sin agua, electricidad, sin baños, con infraestructura colapsada y sin protocolo previo para saber si los docentes

fueron diagnosticados», apuntó.

Ante tal panorama, las sociedades y organizaciones firmantes del documento exigen incorporar las «recomendaciones emanadas desde las academias, sociedades científicas y otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar coordinadamente con estos actores en el abordaje de la pandemia», con el fin de alcanzar una visión comprensiva del regreso a clases en este contexto, «que garantice la protección de la familia venezolana ante la COVID-19 y el derecho a la información de la población».

Apoyan vacunación en menores pero con fármacos aprobados

En el documento también se ventiló el tema de la vacunación a niños y adolescentes venezolanos. Al respecto, recordaron que en el país están disponibles las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac, que ofrecen «seguridad y niveles de protección potenciales altamente beneficiosos» en contra de la COVID-19.

Aunque recalcan que aún la Organización Mundial de la Salud no ha autorizado el uso de emergencia en poblaciones entre 12 y 18 años de estos dos fármacos, ambos han sido «ensayadas exitosamente» en estos grupos poblacionales en países de América Latina y a nivel mundial.

«Sobre la base de estos hechos, no objetamos que sea aprobado su uso por las autoridades sanitarias venezolanas, en el grupo de edades comprendidas entre 13 y 17 años, siempre que se dé cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico nacional señala en materia de autorización de uso de productos farmacéuticos, en situaciones de emergencia», remarcan.

No obstante, les preocupa el tema de la vacunación de menores de doce años. Recuerdan que la OMS todavía no ha autorizado ninguna vacuna contra la COVID-19 para menores de 12 años y que la autorización más reciente es la adoptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU, apenas el pasado 3 de noviembre de 2021, al aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de 5 a 11 años.

En consecuencia, recomiendan no iniciar la vacunación en menores de 12 años hasta no contar con suficientes evidencias del uso seguro de vacunas aprobadas en estas edades y también con el consentimiento informado, por escrito, de sus representantes.

«Bajo ninguna circunstancia se les debe aplicar productos experimentales, lo cual sería violatorio de los derechos de los niños, a tenor de lo dispuesto en las declaraciones, instrumentos, tratados y pactos internacionales más

significativos en materia de Derechos Humanos, incluidos los que garantizan de una manera específica los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata», advierten.

Carlos Walter, epidemiólogo y exministro de Sanidad de Venezuela, indicó además en la rueda de prensa que los prototipos cubanos no han sido autorizados ni siquiera para el uso en adultos.

«No hay. hasta la fecha, ni ellos han publicado información de las diferentes fases por las cuales ha pasado la vacuna, no hay información en revistas científicas indexadas revisadas por pares y la OMS no se ha pronunciado (...) Hemos hecho cuatro comunicados, dirigidos y recibidos por MinSalud y MinEducación en donde decimos que no estamos de acuerdo con la aplicación de candidatos cubanos en niños venezolanos (...) Si los estudios son publicados, avalados y la OMS los autoriza, el escenario cambiaría y la posición científica sería favorable. Mientras la OMS o algún otro instituto serio no dé su aprobación, no podemos dar el visto bueno a un producto experimental que violaría el derecho a la salud de los niños», acotó.

Con información de Runrunes